



Bogotá, D.C.

170

Doctor
FREDDY ANANÍAS URREGO GARZÓN
Subsecretario de Despacho
Comisión Segunda Permanente de Gobierno
Concejo de Bogotá, D.C.
Calle 36 No. 28A – 41
Ciudad

Asunto: Respuesta Proposición No. 175 de 2020
Radicado No. 2020-421-012890-2

Respetado Subsecretario:

Acuso recibo de la Proposición No. 175 de 2020, suscrita por los Honorables Concejales Dora Lucía Bastidas y Martín Rivera Alzate, integrantes de la Bancada del Partido Alianza Verde, relacionada con el tema: "Protocolo de Seguridad".

Sobre el particular, dentro del marco de las competencias que corresponden a esta Secretaría, anexo le remito la respuesta pertinente, suscrita por la Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos, según comunicación con radicado No.20203000050223 del 31 de enero de 2020 (Anexo).

Reciba un cordial saludo,



LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

Anexo: 2 Folios

Proyectó: Oscar Humberto Urueña Medina – Profesional Universitario Contratista DRP
Revisó: Claudia Marcela Suárez Jiménez – Profesional Universitaria DRP
Aprobó: Jaime Andrés Flórez Murcia - Director de Relaciones Políticas

CONCEJO DE BOGOTÁ 31-01-2020 03:28:40

2020ER2789 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO/LUIS ERNESTO GOMEZ LONDOÑO

DESTINO: COMISION 2ª PERM GOBIERNO/URREGO GARZON FREDDY A

ASUNTO: RESPUESTA PROPO 175 DE 2020

OBS: AYDR

GDI - GPD - FOLIO

Versión: 04

Vigencia:

02 de enero 2020



300

Bogotá, D.C

MEMORANDO

PARA: **JAIME ANDRÉS FLOREZ MURCIA**
Director de Relaciones Políticas

DE: **JOSÉ DAVID RIVEROS NAMEN**
Subsecretario para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos

ASUNTO: Respuesta a Proposición No. 175 de 2020 / 20201700049543
Tema: Protocolo de Seguridad

Respetado Jaime Andrés, cordial saludo.

En atención a la solicitud realizada a través del radicado del asunto, es importante mencionar que la actuación que marca el manejo del derecho fundamental a la protesta pacífica por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá busca fortalecer la confianza entre la administración Distrital y la ciudadanía, en aras de establecer un proceso de reconocimiento, garantía y respeto por la protesta social como parte de la sana convivencia de la ciudad y el ejercicio de un legítimo derecho constitucional. En ese sentido, nuestras acciones se han amparado en el pleno y efectivo cumplimiento de la promoción y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y demás normas concordantes y vinculantes, particularmente las que se refieren a continuación;

En primer lugar, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas Maina Kiai ha señalado:

“Los Estados y gobiernos locales tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos de reunión pacífica y de asociación. Deben aplicar los mecanismos que les permitan desempeñar esa labor y fortalecerlos”

En ese mismo sentido, en el Informe conjunto sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones (A/HRC/31/66), expresamente se recomendó a los Estados la adopción de medidas tendientes a garantizar el citado derecho a través de, entre otros, los siguientes mecanismos:

“Las autoridades públicas, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad, han de poder demostrar sus esfuerzos para mantener un verdadero diálogo con los organizadores de las reuniones y/o las personas que participan en ellas.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían velar por que haya una persona de contacto accesible en la institución antes, durante y después de una reunión. Esa persona debe haber recibido formación en materia de comunicación y gestión de los conflictos y responder a los problemas relacionados con la seguridad y la conducta de la policía, así como a las solicitudes sustantivas y las opiniones



expresadas por los participantes. La función de enlace debería estar separada de otras funciones policiales.

Las tácticas empleadas por las fuerzas del orden en las reuniones deberían hacer hincapié en las estrategias destinadas a reducir la tensión basándose en la comunicación, la negociación y el diálogo. La capacitación de los agentes del orden debería incluir formación previa y en el servicio, tanto en el aula como en contextos que representen distintas situaciones.

Antes de que las fuerzas de seguridad elijan y adquieran los equipos, incluidas las armas no letales, que se utilizarán en concentraciones, los Estados deberían evaluar esos equipos de manera transparente e independiente a fin de determinar si cumplen el derecho y las normas internacionales en materia de derechos humanos. En especial, debería evaluarse su precisión, fiabilidad y capacidad de minimizar los daños físicos y psicológicos.

Las autoridades deberían dialogar activamente con los supervisores manteniendo una comunicación continua antes, durante y después de una reunión; ofreciendo acceso e información a los miembros de los medios de comunicación y otros supervisores; y examinando y respondiendo a las denuncias de los supervisores después de las reuniones”;

Adicionalmente, nuestras actuaciones se enmarcan en los pronunciamientos y sentencias de la Corte Constitucional dentro de las cuales resalta la Sentencia C-009 de 2018 que manifiesta:

Los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica son fundamentales, incluyen la protesta y están cobijados por las prerrogativas del derecho a la libertad de expresión. Así mismo excluyen de su contorno material las manifestaciones violentas y los objetivos ilícitos. Estos derechos tienen una naturaleza disruptiva, un componente estático (reunión/pública) y otro dinámico (manifestación pública). En este sentido, el ejercicio de estos derechos es determinante para la sociedad en la preservación de la democracia participativa y el pluralismo. Adicionalmente, sus limitaciones deben ser establecidas por la ley y, para que sean admisibles, deben cumplir con el principio de legalidad y, por lo tanto, ser previsibles.

Así entonces, esta promoción y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, durante los eventos de movilizaciones que han ocurrido desde el inicio de nuestra administración, ha sido reconocido por los mayores legitimadores de este campo como The Human Right Watch y la Organización de Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, los cuales resaltaron que la actuación realizada corresponde y se ajusta a los estándares internacionales.

Ahora bien, dando seguimiento a la proposición en mención en la que se requiere información relacionada con el Protocolo de Seguridad, es importante aclarar que la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia es la entidad encargada de liderar, planear, implementar y evaluar la política pública en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia, así como gestionar los servicios de emergencias, para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos del Distrito Capital.

Pr su parte, la Secretaría Distrital de Gobierno, en el marco de sus competencias, se encarga de liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar el respeto de los derechos humanos y la convivencia pacífica en la ciudad, así como generar procesos y dinámicas de mediación para la atención de los conflictos sociales que se debatan en el marco del ejercicio de derechos.



A partir de las acciones definidas por esta Secretaría, se brinda respuesta en los siguientes términos:

2. ¿Cuál es el objetivo de la participación de las madres gestoras de paz en las marchas? ¿Cómo son elegidas? ¿Reciben remuneración alguna?

Las Madres Gestoras de Paz, son una organización de la sociedad civil que voluntariamente se han articulado con la Secretaría Distrital de Gobierno como una Comisión de Verificación e Intervención. Por lo tanto, no existen recursos públicos comprometidos en su ejercicio, no tienen ninguna relación laboral con el Distrito, ni están amparadas por riesgos laborales en función de su participación en las manifestaciones.

En ese mismo sentido, la integración, organización y formas de expresión de esta Comisión, se desarrollan desde su autonomía y al respecto, la labor del Distrito en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno se enfoca en promover y fortalecer estas expresiones ciudadanas en búsqueda de la convivencia y el goce efectivo de derechos de todos los ciudadanos.

3. El decreto 563 de 2015 regula actualmente las actuaciones en las movilizaciones sociales en Bogotá, ¿se planean realizar modificaciones?

El Decreto 563 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "*por medio del cual se adopta el Protocolo de Actuación para las Movilizaciones Sociales en Bogotá*": por el derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica no ha sido modificado. El anuncio hecho frente a las protestas y las manifestaciones del 16 de enero de la anualidad por la Alcaldesa corresponde a una aplicación de los procedimientos y mecanismos de actuación de las autoridades del Distrito, así como de la Fuerza Pública, en función de los momentos de la movilización, a la luz del precitado Decreto y de la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior.

Por lo anterior, no se presentan cambios en los procedimientos utilizados, sino que se organiza el accionar de la administración distrital y de la fuerza pública en dichos eventos.

5. En las ocasiones que la ciudad afronte este tipo de marchas ¿Cuáles son los gastos logísticos en los que incurre la administración distrital? Por favor informar los gastos desde el año 2015 hasta la fecha. (enviar información en documento Excel)

El objetivo principal del "protocolo de actuación para las movilizaciones sociales en Bogotá: por el derecho a la movilización y la protesta pacífica", adoptado por el Artículo 1 del Decreto Distrital 563 de 2015, es garantizar el derecho a la protesta pacífica atendiendo a los mecanismos para el mantenimiento del orden público, la garantía de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, así como a sus deberes para lograr una convivencia armónica en la ciudad a partir de la coordinación de las acciones de respeto y garantía de la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica.

Para ello, el Decreto en mención se enmarca en los principios de coordinación y eficacia al tiempo que instruye en el literal (f) del numeral 5, a esta Secretaría para que cuando lo considere necesario, concerte sus actividades con las entidades que resulten pertinentes.

Así mismo, con la expedición del Acuerdo 637 de 2016 el Concejo de Bogotá se aprobó la creación del Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, así como la Secretaría Distrital de



Seguridad, Convivencia y Justicia, por lo que se trasladaron a dicha entidad algunas competencias relacionadas con el tema, como gestión de los Gestores de Convivencia.

En ese contexto la implementación del protocolo de actuación para las movilizaciones sociales en Bogotá: por el derecho a la movilización y la protesta pacífica no ha generado gastos logísticos asociados a la competencia de esta Secretaría.

6. En qué consiste la sanción social, ¿es verdaderamente una medida correctiva? ¿fue útil en la marcha del 21 de enero?

El objetivo principal del "protocolo de actuación para las movilizaciones sociales en Bogotá: por el derecho a la movilización y la protesta pacífica", adoptado por el Artículo 1 del Decreto Distrital 563 de 2015, es garantizar el derecho a la protesta pacífica atendiendo a los mecanismos para el mantenimiento del orden público, la garantía de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, así como a sus deberes para lograr una convivencia armónica en la ciudad a partir de la coordinación de las acciones de respeto y garantía de la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de consciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica.

En consecuencia, la fase de sanción social se entiende como un ejercicio de autorregulación de los manifestantes soportado en la empatía y el respeto mutuo de quienes han organizado o participan de las protestas al que se espera acudan en el momento que exista alguna anomalía en su desarrollo y consiste en un ejercicio de diálogo autónomo para apaciguar los hechos que se estén presentando y sean contrarios al espíritu de la manifestación.

Dicho ejercicio ha permitido que en la mayoría de las manifestaciones que se han presentado en la ciudad desde el 16 de enero de los corrientes, las acciones propiciadas por los manifestantes se ponderen con los derechos del resto de ciudadanos.

7. ¿De qué manera se va a responder a los afectados por los daños en infraestructura privada?

El Protocolo de Actuación para las Movilizaciones Sociales en Bogotá: por el derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica adoptado por el Decreto 563 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no tiene contemplado responder a los afectados por los daños en infraestructura privada pues vela por la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones.

Atentamente,


JOSÉ DAVID RÍVEROS NAMEN
Subsecretario para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos

Elaboró: Equipo Dirección de Convivencia y Diálogo Social

Revisó: Néstor Daniel García - Dirección de Convivencia y Diálogo Social

José Luis García Rojas - Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos

Aprobó: José David Riveros Namen - Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos